

DECLARACIÓN DEL XIII ENCUENTRO

CUMBRE SOCIAL DE MADRID

Madrid, 24 de Marzo 2014

La Comunidad de Madrid, al igual que ocurre en todo el país, se encuentra en un momento crucial. Hemos atravesado seis años de intensa crisis económica, y casi cuatro de sufrimiento de una agenda de políticas de austeridad extrema dirigida desde ámbitos internacionales, aplicadas al extremo, allí donde gobierna el Partido Popular.

Los resultados obtenidos por esas políticas económicas de la austeridad a ultranza son indefendibles.

Estas políticas han demostrado su ineficacia para sacarnos de la crisis mientras que han provocado un fuerte aumento del desempleo y, sobre todo, de las desigualdades económicas y sociales, de la pobreza y del riesgo de exclusión social que resultan inaceptables.

Hoy en día, asistimos a intolerables fenómenos sociales que creíamos desterrados definitivamente en su plasmación más generalizada, como la pobreza infantil, que han cobrado fuerza y encendido todas las alarmas.

La Cumbre Social de Madrid no acepta que éste sea el camino de presente ni de futuro, ni puede convenir en llamar salida de la crisis a una senda que conduce al empobrecimiento de la mayoría de la ciudadanía a través de continuas agresiones.

El gobierno del Partido Popular ha acometido reformas clave en el Estado de bienestar y del modelo de convivencia de nuestro país. Ha utilizado la crisis para imponer una serie de cambios legales de calado que pretenden imponer a toda la sociedad su particular ideario, neoliberal en lo económico y ultraconservador en lo social: mercado laboral, negociación colectiva, pensiones, sanidad, educación, prestaciones por desempleo, servicios sociales, justicia, Administraciones Públicas, seguridad ciudadana, aborto, políticas de cooperación, etc.

No cabe duda de que estas políticas basadas en la austeridad y los recortes, están provocando en nuestro país una verdadera regresión en términos de calidad de vida, derechos y libertades.

Por eso en la Cumbre Social de Madrid, creemos que en estos momentos es necesaria el mantenimiento de las actuaciones que combatan las regresivas e injustas políticas aplicadas, para situar a nuestro país en la senda de una verdadera recuperación económica y social.

DESEMPLEO Y PÉRDIDA DE DERECHOS LABORALES

Afirmamos que la Reforma Laboral, al cumplirse dos años de su aprobación, ha fracasado. No ha creado el empleo que se prometía, por el contrario, el desempleo y la desigualdad han aumentado en nuestro país y en la Comunidad de Madrid.

Los despidos, la reducción de derechos, condiciones laborales y salarios son una constante en muchas empresas de la Comunidad de Madrid que utilizan la reforma laboral como instrumento de imposición y abuso. Ejemplos de ello, son los múltiples conflictos laborales con el mismo común denominador; el despido y el deterioro de las condiciones de trabajo a favor del capital, sin justificación alguna, e incluso en situaciones de obtención de beneficios, como ocurre en los casos de CocaCola, Continental Alsa ó el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de la restauración del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.

Tanto los datos de la última encuesta de Población Activa como los datos de paro registrado del mes de febrero, indican que la situación en la región es muy preocupante. Mientras el paro desciende en el conjunto del Estado, Madrid vuelve a registrar una nueva subida. Hay 691.000 trabajadores y trabajadoras que quieren trabajar y no pueden hacerlo, a lo que hay que añadir que las personas desempleadas sin prestación se han incrementado hasta llegar a las 390.000. Un escenario de paro y desprotección que convierte a los madrileños y madrileñas en más vulnerables. Así se pone de manifiesto en el aumento de la pobreza y riesgo de exclusión en la Región, que ya alcanza al 20,4% de la población madrileña.

Por otra parte, la clara merma de poder adquisitivo de la población producida por los recortes, el aumento de la carestía de la vida, los precios en la cesta de la compra, energía, copagos

farmacéuticos y sanitarios, etc. y la precarización de las condiciones laborales ha generado que un alto índice de personas, pese a contar con un salario ó renta, tengan graves dificultades para acceder a bienes esenciales como la alimentación y la energía, provocándose escenarios de auténtica emergencia social.

La generación de empleo de calidad y la corrección de estas situaciones de desprotección, deben ser objetivos prioritarios para la sociedad organizada en su conjunto, promoviendo la revitalización de la intervención pública en la cobertura y prestación de esos servicios y garantías esenciales. Ningún ciudadano ni ciudadana debe quedar sin protección social pública.

MENOS DERECHOS SOCIALES Y DE CIUDADANÍA

Se aprovecha la crisis para recortar los derechos de ciudadanía. Las políticas del PP nos arrastran a tiempos que creíamos superados, con el recorte en todos los servicios básicos como la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte, la luz, el gas, el agua, las comunicaciones o los servicios sociales. Además, las reformas legislativas como la eliminación de la Justicia Universal, la Ley del aborto, que atenta contra los derechos de las mujeres, la LOMCE que mercantiliza con el derecho a la educación, la expulsión de miles de personas del Sistema Nacional de Salud, la limitación del acceso a la Justicia imponiendo tasas judiciales inadmisibles, y la especulación con derechos y recursos públicos esenciales, como la vivienda, pública poniendo en manos de "fondos buitres" un patrimonio social de esta dimensión, etc. ahondan en un modelo que antepone los intereses partidistas y economicistas a los de la ciudadanía. Todo ello ha generado un ambiente de indignación que se pone de manifiesto, día tras día, en las diversas y múltiples movilizaciones y que fue claramente patente, en las masivas Marchas convocadas el 22M, y que fueron drásticamente reprimidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en una intervención desproporcionada y cada vez más frecuente. Condenamos este tipo de actuaciones y exigimos las responsabilidades políticas correspondientes.

Los recortes en materia de igualdad y de los programas para la prevención de la violencia machista han derivado en un peligroso y preocupante repunte de los casos de violencia de género. Recortes que han alcanzado el 47% en el caso del Presupuesto del Estado, en los últimos dos años, y al 46,2% en el caso de la Comunidad de Madrid desde 2009. En este sentido, la Cumbre Social de Madrid quiere denunciar dichos recortes y exige el desarrollo completo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, dando su apoyo a la concentración que con tal motivo se celebrará en la Puerta del Sol el próximo 25 de marzo.

Se está demostrando que la lucha, la constancia y la unidad logran avances. La respuesta ciudadana frente al debilitamiento del modelo de Estado Social está dando sus frutos y así la marea blanca, por citar un ejemplo, ha logrado la paralización de la privatización de 6 Hospitales y 27 Centros de Salud.

En paralelo el Gobierno, en su línea de involución democrática y recorte de derechos civiles, impulsa nuevas estrategias para acallar a la ciudadanía, y así nos encontramos con la "ley mordaza" ó la criminalización de la lucha sindical con el proceso judicial abierto a los 8 sindicalistas de CASA AIRBUS y el intento de limitar derechos fundamentales como el derecho a huelga.

En definitiva, un escenario de regresión que lo único que produce es más sufrimiento, pobreza y exclusión social en nuestro país, acabando poco a poco con el modelo de Bienestar y cuestionando, incluso, nuestro Estado Social y de Derecho que hemos tardado más de 30 años en construir.

En este contexto, la Cumbre Social de Madrid se reafirma en la necesidad de seguir trabajando en respuestas unitarias de la ciudadanía, en la exigencia de un cambio de rumbo de las políticas actuales y en la construcción de alternativas que permitan una transformación social, asimismo se rechaza el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y EEUU. En esta línea, traslada su apoyo a la movilización convocada por los sindicatos UGT, CCOO y USO, en el marco de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) del próximo 3 de abril contra las políticas regresivas de austeridad, a favor de un plan de inversiones que genere empleo estable y de calidad, y unas políticas públicas que garanticen la protección de las personas.